

No. 38227

**Argentina
and
Costa Rica**

Agreement between the Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Costa Rica for the reciprocal promotion and protection of investments (with protocol). Buenos Aires, 21 May 1997

Entry into force: *1 May 2001, in accordance with article 13*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 13 March 2002*

**Argentine
et
Costa Rica**

Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements (avec protocole). Buenos Aires, 21 mai 1997

Entrée en vigueur : *1er mai 2001, conformément à l'article 13*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Argentine, 13 mars 2002*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
RECÍPROCAS DE INVERSIONES**

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Costa Rica, denominados en adelante las "Partes Contratantes";

Con el deseo de intensificar la cooperación económica entre ambos países;

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones de los inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante;

Reconociendo que la promoción y la protección de tales inversiones sobre la base de un acuerdo contribuirá a estimular la iniciativa económica individual e incrementará la prosperidad en ambos Estados.

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

DEFINICIONES

A los fines del presente Acuerdo:

1. El término "inversión" designa, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de bienes invertidos por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con la legislación de esta última. Incluye en particular, aunque no exclusivamente:

- a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como hipotecas, cauciones, y derechos de prenda;
- b) acciones, títulos, obligaciones y cualquier otro tipo de participación en sociedades;
- c) obligaciones o créditos directamente vinculados a una inversión, regularmente contraídos y documentados según las disposiciones vigentes en el país donde esa inversión sea realizada;

d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, derechos conexos y derechos de propiedad industrial, tales como marcas de fábrica o de comercio, denominaciones de origen, diseños y modelos industriales y patentes;

e) concesiones para el ejercicio de una actividad económica conferidas por ley o por contrato, incluyendo las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

Ninguna modificación de la forma según la cual la inversión haya sido realizada afectará su calificación de inversiones de acuerdo con el presente Acuerdo.

2. El término "inversor" designa con relación a cualquiera de las Partes Contratantes, los siguientes sujetos que hayan realizado inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante conforme al presente Acuerdo y la legislación de ésta última:

a) toda persona física que sea nacional de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación;

b) toda persona jurídica incluidas compañías, corporaciones, sociedades y cualquier otra organización que se encuentre constituida de conformidad con las leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante, independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.

3. Las disposiciones de este Acuerdo no se aplicarán a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, si tales personas, a la fecha de la inversión, han estado domiciliadas desde hace más de dos años en esta última Parte Contratante, a menos que se pruebe que la inversión fue admitida en su territorio desde el exterior.

4. Los términos ganancias o rentas de inversión designan todas las sumas producidas por una inversión, tales como utilidades, dividendos, intereses, incrementos de capital y otros ingresos corrientes.

5. El término "territorio" designa el territorio nacional de cada Parte Contratante, incluyendo el mar territorial así como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del límite del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes sobre la cual éstas tienen o pueden tener, de acuerdo con el derecho internacional, jurisdicción y derechos soberanos a efectos de la explotación, exploración y preservación de los recursos naturales.

ARTICULO 2

PROMOCIÓN Y ADMISIÓN

1. Cada Parte Contratante promoverá en su territorio las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y admitirá dichas inversiones conforme a sus leyes y reglamentaciones.

2. Las Partes Contratantes facilitarán la celebración de consultas con relación a las oportunidades de inversión en sus respectivos territorios.

3. La Parte Contratante que haya admitido una inversión en su territorio otorgará, de acuerdo con sus leyes y reglamentaciones, las autorizaciones que sean necesarias en relación con dicha inversión, así como las requeridas para la ejecución de contratos de licencia, asistencia técnica, comercial o administrativa.

ARTICULO 3

PROTECCIÓN

Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, les otorgará en su territorio plena protección y seguridad y no obstaculizará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas arbitrarias o discriminatorias.

ARTICULO 4

TRATO NACIONAL Y DE NACIÓN MAS FAVORECIDA

1. Cada Parte Contratante, una vez que haya admitido en su territorio inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, acordará a tales inversiones un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversores nacionales o de inversores de terceros Estados.

2. Entre el trato nacional y el trato de nación más favorecida, cada Parte Contratante concederá el trato que sea más favorable para la inversión del inversor.

3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, el tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que cada Parte Contratante acuerda a las inversiones de los inversores de un tercer Estado como consecuencia de su participación actual o futura en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica o monetaria u otras instituciones de integración económica similares.

4. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no serán interpretadas en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de un acuerdo internacional para evitar la doble imposición u otros acuerdos en materia tributaria.

5. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no serán tampoco interpretadas en el sentido de extender a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de los acuerdos bilaterales que proveen financiación concesional suscritos entre la República Argentina con la República de Italia el 10 de diciembre de 1987 y con el Reino de España el 3 de junio de 1988.

ARTICULO 5

EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIÓN

1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto (en adelante denominadas "expropiación"), contra inversiones que se encuentren en su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de interés público, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. El monto de dicha indemnización corresponderá al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la expropiación inminente se hiciera pública, cualquiera de estas circunstancias fuera anterior, comprenderá intereses desde la fecha de la desposesión a una tasa bancaria usual, será pagada sin demora en moneda convertible y será efectivamente realizable y libremente transferible.

2. El inversor afectado tendrá derecho, de conformidad con las leyes de la Parte Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión, por parte de una autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente de dicha Parte Contratante, de su caso para determinar si la expropiación y la valoración de su inversión se han adoptado de acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 1 de este Artículo.

ARTICULO 6

INDEMNIZACIÓN POR PERDIDAS

Los inversores de una Parte Contratante, que sufrieran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, debido a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección, disturbios civiles y otros acontecimientos de conmoción interior similares, recibirán, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a las inversiones de sus propios inversores o a las inversiones de inversores de un tercer Estado, cualquiera sea el tratamiento más favorable para la inversión del inversor afectado.

ARTICULO 7

TRANSFERENCIAS

1. Cada Parte Contratante permitirá a los inversores de la otra Parte Contratante la transferencia irrestricta de las inversiones y ganancias, y en particular, aunque no exclusivamente de:

- a) el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones;
- b) los beneficios, utilidades, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes;
- c) los fondos necesarios para el reembolso de los préstamos tal como se definen en el artículo 1, párrafo 1 c),

- d) el producto de una venta o liquidación total o parcial de una inversión;
- e) las indemnizaciones previstas en los artículos 5 y 6;
- f) los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante que hayan obtenido una autorización para trabajar en relación a una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante.
- g) los pagos resultantes de la solución de controversias relativas a una inversión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las Partes Contratantes podrán tomar medidas al amparo de su legislación para evitar acciones fraudulentas, velar por el cumplimiento de obligaciones fiscales o recopilar información con fines estadísticos.

2. Las transferencias serán efectuadas sin demora, en moneda libremente convertible, al tipo de cambio vigente a la fecha de la transferencia, conforme con los procedimientos establecidos por la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, los cuales no podrán afectar la sustancia de los derechos previstos en este artículo.

3. Una transferencia se considerará realizada sin demora cuando se haya efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de transferencia. El plazo, que en ningún caso podrá exceder de dos meses, comenzará a correr en el momento de entrega de la correspondiente solicitud, debidamente presentada.

ARTICULO 8

PRINCIPIO DE SUBROGACIÓN

1. Si una Parte Contratante o una de sus agencias realizara un pago a un inversor en virtud de una garantía o seguro otorgado contra riesgos no comerciales que hubiere contratado en relación a una inversión, la otra Parte Contratante reconocerá, de acuerdo con los procedimientos estipulados en su legislación, la validez de la subrogación en favor de aquella Parte Contratante o una de sus agencias respecto de cualquier derecho o título del inversor. La Parte Contratante o una de sus agencias estará autorizada, dentro de los límites de la subrogación, a ejercer los mismos derechos que el inversor hubiera estado autorizado a ejercer.

2. En el caso de una subrogación tal como se define en el párrafo 1 de este artículo, el inversor no interpondrá ningún reclamo a menos que esté autorizado a hacerlo por la Parte Contratante o su agencia.

ARTICULO 9

CONDICIONES MAS FAVORABLES

Si las disposiciones de la legislación de cualquier Parte Contratante o las obligaciones de derecho internacional existentes o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes en adición al presente Acuerdo o si un acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante contienen normas, ya sean generales o

específicas que otorguen a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el que se establece en el presente Acuerdo, aquellas normas prevalecerán sobre el presente Acuerdo, en la medida que sean más favorables.

ARTICULO 10

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después de la fecha de su entrada en vigor, pero las disposiciones del presente Acuerdo no se aplicarán a ninguna controversia, reclamo o diferendo que haya surgido con anterioridad a su entrada en vigor o que esté relacionado con hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia o que esté referido a la mera permanencia de tales situaciones preexistentes.

ARTICULO 11

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

1. Las controversias que surgiesen entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán, en lo posible, solucionadas por la vía diplomática.
2. Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser dirimida de esa manera en un plazo razonable, esta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes a un tribunal arbitral.
3. Dicho tribunal arbitral será constituido para cada caso particular de la siguiente manera. Dentro de los tres meses de la comunicación del pedido de arbitraje, cada Parte Contratante designará un miembro del tribunal. Estos dos miembros elegirán a un nacional de un tercer Estado quien, con la aprobación de ambas Partes Contratantes, será nombrado presidente del tribunal. El presidente será nombrado en un plazo de cinco meses a partir de la fecha de comunicación del pedido de arbitraje.
4. Si dentro de los plazos previstos en el párrafo 3 de este artículo no se hubieran efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Si el presidente fuere nacional de una de las Partes Contratantes o cuando, por cualquier razón, se hallare impedido de desempeñar dicha función, se invitará al Vicepresidente a efectuar los nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, o si se hallare también impedido de desempeñar dicha función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga inmediatamente en el orden de precedencia y no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, será invitado a efectuar los nombramientos necesarios.
5. A menos que las Partes Contratantes lo decidan de otro modo, el tribunal establecerá su propio procedimiento.
6. El tribunal arbitral decidirá sobre la base del presente Acuerdo, así como de las normas de derecho internacional generalmente reconocidas. Tomará su decisión por mayoría de votos. Tal decisión será definitiva y vinculante para ambas Partes

Contratantes. Cada Parte Contratante sufragará los gastos de su miembro del tribunal y de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del Presidente, así como los demás gastos serán sufragados en principio por partes iguales por las Partes Contratantes.

ARTICULO 12

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UN INVERSOR Y LA PARTE CONTRATANTE RECEPTORA DE LA INVERSIÓN

1. Toda controversia relativa a las inversiones, en los términos del presente Acuerdo, entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, será notificada por escrito, incluyendo una información detallada, por el inversor a la Parte Contratante receptora de la inversión y será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas.

2. Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir de la fecha de la notificación escrita mencionada en el párrafo 1, podrá ser sometida, a pedido del inversor:

- a) a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, o
- b) al arbitraje internacional en las condiciones descritas en el párrafo 5.

3. Si la controversia ha sido planteada por el inversor y las partes no llegan a un acuerdo sobre la elección de a) o b), prevalecerá la opinión del inversor.

4. De acuerdo a los párrafos 2) y 3), una vez que el inversor o la Parte Contratante haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.

5. En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser llevada:

- a) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente Acuerdo se haya adherido a aquél. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el Reglamento del Mecanismo Complementario del C.I.A.D.I. para la administración de procedimientos de conciliación, de arbitraje o de investigación;
- b) a un tribunal de arbitraje "ad hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).

6. Si después de un período de tres meses siguientes a la notificación por escrito del sometimiento de la controversia al arbitraje, no hubiere acuerdo sobre la selección del foro según lo dispuesto en el párrafo 5 a) o párrafo 5 b), las Partes en la controversia

deberán someterla al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

7. El órgano arbitral decidirá con base en las disposiciones del presente Acuerdo, el derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, incluidas las normas relativas a conflictos de leyes, a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos en relación con la inversión así como también a los principios del derecho internacional en la materia.

8. Las sentencias arbitrales serán definitivas y vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante las ejecutará de conformidad con su legislación.

9. Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar, a través de los canales diplomáticos, argumentos concernientes al arbitraje o a un proceso judicial ya en marcha, salvo que las partes en la controversia no hubieran cumplido el laudo del tribunal arbitral o la sentencia del tribunal ordinario, según los términos de cumplimiento establecidos en el laudo o en la sentencia.

ARTICULO 13

ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes a partir de la fecha en que las Partes Contratantes se notifiquen por escrito que han cumplido los respectivos requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este Acuerdo, su validez será de diez años. Luego permanecerá en vigor hasta la expiración de un plazo de un año contado a partir de la fecha en que alguna de las Partes Contratantes notifique por escrito a la otra Parte Contratante su decisión de dar por terminado este Acuerdo.

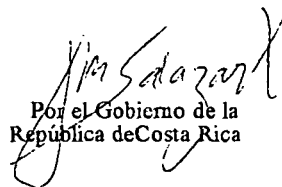
2. En relación con aquellas inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que la notificación de terminación de este Acuerdo se haga efectiva, las disposiciones de los artículos 1 a 12 continuarán en vigencia por un período de 10 años a partir de esa fecha.

Hecho en Buenos Aires, el 21 de mayo de 1997, en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo los dos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la
República Argentina



Por el Gobierno de la
República de Costa Rica



PROTOCOLO

Al firmar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, la República Argentina y la República de Costa Rica convinieron en las siguientes disposiciones que constituyen parte integrante del Acuerdo referido.

Ad Artículo 5

1. A los efectos del artículo 5, inciso 1.- las Partes Contratantes acuerdan que en el caso de Costa Rica se entenderá por "el valor de mercado" el concepto de justo precio que será equivalente al monto de la indemnización que se determinará de la siguiente manera:

El dictamen deberá incluir todos los datos necesarios para individualizar el bien que se valora.

Cuando se trate de inmuebles, el dictamen contendrá la valoración independientemente del terreno, los cultivos, las construcciones, los inquilinatos, los arrendamientos, los derechos comerciales, el derecho por explotación de yacimientos y cualesquiera otros bienes o derechos susceptibles de indemnización.

Cuando se trate de bienes muebles, cada uno se valorará separadamente y se indicarán las características que influyen en su valoración.

Los avalúos tomarán en cuenta sólo los daños reales permanentes. No se incluirán ni se tomarán en cuenta los hechos futuros ni las expectativas de derecho que afecten el bien. Tampoco podrán reconocerse plusvalías derivadas del proyecto que origina la expropiación.

Todo dictamen pericial deberá indicar, en forma amplia y detallada, los elementos de juicio en que se fundamenta el valor asignado al bien y la metodología empleada.

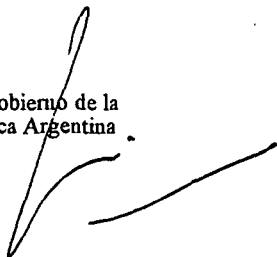
2. Las Partes Contratantes acuerdan que, cualquier eventual disputa en materia de distribución o administración de cuotas de exportación en el mercado interno, derivadas de la aplicación de restricciones cuantitativas por una de las Partes Contratantes o un tercer Estado, es un asunto de naturaleza comercial. Consecuentemente, el mismo será resuelto por la normativa comercial aplicable entre las Partes Contratantes.

Por ello, nada de lo dispuesto en el artículo 5 del presente Acuerdo servirá de base para que un inversor de una de las Partes Contratantes alegue que los efectos derivados de la distribución o administración de una cuota se consideren una expropiación indirecta.

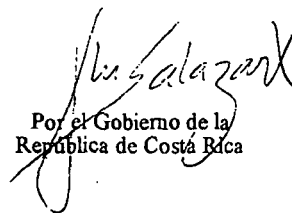
Ad Artículo 7

Nada de lo dispuesto en el inciso f.- del artículo 7 se interpretará en el sentido de obligar a cualquiera de las Partes Contratantes a autorizar el ejercicio profesional, lo cual estará sujeto a la legislación de cada Parte Contratante.

Por el Gobierno de la
República Argentina



Por el Gobierno de la
República de Costa Rica



[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA FOR THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Costa Rica, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Desiring to intensify economic cooperation between the two countries,

Intending to create favourable conditions for investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

Recognizing that the promotion and protection of such investments on the basis of an agreement will encourage individual economic initiative and increase prosperity in both States,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

I. The term "investment" means, in conformity with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment was made, every kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the latter's legislation. It includes in particular, though not exclusively:

(a) Movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, sureties, liens and pledges;

(b) Shares, stocks, debentures and any other form of participation in companies;

(c) Rights involving debentures or claims directly connected with an investment that are lawfully contracted and documented in accordance with the legal provisions in force in the country in which the investment is made;

(d) Intellectual property rights, including copyright, related rights and industrial property rights, such as trademarks or trade names, names of origin, industrial designs and models, and patents;

(e) Business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.

No change in the form in which the investment has been made shall affect its status as an investment under this Agreement.

2. "Investor" means, in relation to any of the Contracting Parties, the following individuals who have made investments in the territory of the other Contracting Party in accordance with this Agreement and the legislation of the latter Contracting Party:

(a) Any individual who is a national of one of the Contracting Parties in accordance with its legislation;

(b) Any legal person, including companies, corporations, partnerships or any other organization, whether or not for profit, provided that it is constituted in accordance with the laws and regulations of one of the Contracting Parties and has its head office in the territory of that Contracting Party.

3. The provisions of this Agreement shall not apply to investments by individuals who are nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, if such individuals, on the date of the investment, have been domiciled for more than two years in the latter Contracting Party, unless it can be proved that such investments originate from abroad.

4. "Returns" or "yields on investment" mean all amounts yielded by an investment, such as profits, dividends, interest, capital increases and other current income.

5. "Territory" means the national territory of each Contracting Party, including the territorial sea, together with the exclusive economic zone and the continental shelf beyond the limits of the territorial sea of each Contracting Party, over which it exercises or may exercise, in accordance with international law, jurisdiction and sovereign rights with regard to exploitation, exploration and protection of natural resources.

Article 2

Promotion and acceptance of investments

1. Each Contracting Party shall promote in its territory investments by investors of the other Contracting Party and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.

2. The Contracting Parties shall facilitate the holding of consultations on investment opportunities in their respective territories.

3. When a Contracting Party has accepted an investment in its territory, it shall, in accordance with its laws and regulations, grant the necessary permits in connection with that investment, as well as those required for the execution of contracts relating to licences, and technical, commercial and administrative assistance.

Article 3.

Protection

Each Contracting Party shall at all times ensure fair and equitable treatment to investments by investors of the other Contracting Party, shall grant in its territory full protection and security to investments, and shall not impair the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments through arbitrary or indiscriminate measures.

Article 4.

Treatment as nationals and most-favoured-nation

1. When a Contracting Party has admitted investments in its territory by investors of the other Contracting Party, it shall accord such investments treatment no less favourable than that given to investments by its own investors or investors of third States.

2. Between treatment as nationals and most-favoured-nation treatment, each Contracting Party shall accord the treatment that is most favourable to the investment of the investor.

3. Without prejudice to the provisions of paragraph (1) of this article, most-favoured-nation treatment shall not apply to the privileges which each Contracting Party accords to investments by investors of a third State as a result of its current or future participation in a free trade area, customs union, common market, economic or monetary union, or other similar economic integration institutions.

4. The provisions of paragraph (1) of this article shall not be interpreted as meaning that either Contracting Party is obliged to accord to investments by investors of the other Contracting Party the benefits of any treatment, preference or privilege resulting from an international double taxation avoidance agreement or other tax agreement.

5. The provisions of paragraph (1) of this article shall not be interpreted either as meaning that the Argentine Republic is obliged to extend to investments by investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from the bilateral agreements concerning concessional financing concluded with the Italian Republic on 10 December 1987 and with the Kingdom of Spain on 3 June 1988.

Article 5.

Expropriation and compensation

1. Neither Contracting Party shall take nationalization or expropriation measures or any other measure having the same effect (hereinafter referred to as "expropriation") against investments in its territory belonging to investors of the other Contracting Party, unless such measures are taken for reasons of public interest, on a basis of non-discrimination and according to due process of law. The measures shall be accompanied by arrangements for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the market value of the expropriated investment immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge, whichever of these circumstances is earlier, shall include interest at a normal commercial rate from the expropriation date, shall be paid without delay in convertible currency, and shall be effectively realizable and freely transferable.

2. The investor affected shall have the right, in accordance with the laws of the Contracting Party responsible for the expropriation, to prompt review of his or its case by the competent judicial or other independent authority of that Contracting Party, in order to de-

termine whether the expropriation and valuation of the investment were carried out in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article.

Article 6

Compensation for losses

The investors of a Contracting Party who suffer losses on their investments in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, state of national emergency, revolt, insurrection, civil disturbance or any other similar events of domestic disturbance shall be accorded by the latter Contracting Party treatment as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement no less favourable than that accorded to the investments of its own investors or to the investments of investors of a third State, whichever treatment is more favourable to the investment of the affected investor.

Article 7

Transfers

1. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party the unrestricted transfer of investments and earnings and in particular, but not exclusively, the following:

- (a) The initial capital and additional amounts necessary for the maintenance and development of the investments;
- (b) Profits, interest, dividends and other current income;
- (c) Funds required for the repayment of the loans referred to in article 1, paragraph 1 (c);
- (d) The proceeds from the sale or total or partial liquidation of an investment;
- (e) The compensation provided for in articles 5 and 6;
- (f) The income of nationals of one Contracting Party who have received work permits in connection with an investment in the territory of the other Contracting Party;
- (g) Payments resulting from the settlement of disputes arising from an investment.

Without prejudice to the provisions of this article, the Contracting Parties may take measures under their legislation to prevent fraud, ensure compliance with fiscal obligations or compile information for statistical purposes.

2. The transfers shall be effected without delay in freely convertible currency at the rate of exchange applicable on the date of the transfer, in accordance with the procedures established by the Contracting Party in whose territory the investment was made; these procedures shall not affect the substance of the rights provided for in this article.

3. A transfer shall be deemed to have been made without delay if it is effected within the period normally required for the completion of transfer formalities. Such period shall commence with the submission of the relevant request and may in no circumstances exceed two months.

Article 8

Principle of subrogation

1. If a Contracting Party or one of its agencies makes a payment to an investor under a guarantee or insurance against non-commercial risks which it has accorded in respect of an investment, the other Contracting Party shall, in accordance with the procedures provided for in its legislation, recognize the validity of the subrogation in favour of that Contracting Party or one of its agencies with respect to any right or entitlement of the investor. The Contracting Party or one of its agencies shall be authorized, within the limits of the subrogation, to exercise the same rights as the investor would have been authorized to exercise.

2. In the event of a subrogation as defined in paragraph (1) of this article, the investor shall make no claim unless authorized to do so by the Contracting Party or its agency.

Article 9.

More favourable terms

If the legislation of either Contracting Party or any current or future obligation arising out of international law established between the Contracting Parties in addition to this Agreement, or an agreement between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party contain general or specific rules according the investments made by investors of the other Contracting Party treatment more favourable than that provided for in this Agreement, those rules shall prevail over this Agreement, to the extent that they are more favourable.

Article 10.

Scope of application

This Agreement shall apply to all investments made before or after the date of its entry into force, but its provisions shall not be applicable to any dispute, claim or disagreement that arose prior to its entry into force or that is related to events that occurred prior to its entry into force or that is related to the mere continuation of such pre-existing situations.

Article 11

Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through the diplomatic channel.

2. If a dispute between the Contracting Parties cannot be thus settled within a reasonable period, it shall be submitted, at the request of either Contracting Party, to an arbitral tribunal.

3. The arbitral tribunal shall be established for each specific case in the following manner. Within three months of the transmittal of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. These two members shall elect a national of a third State who, with the approval of the two Contracting Parties, shall be appointed president of the tribunal. The president shall be appointed within five months following the date of the transmittal of the request for arbitration.

4. If the necessary appointments have not been made within the time limits provided for in paragraph (3) of this article, either Contracting Party may, in the absence of other arrangements, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented from discharging that function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is also a national of either Contracting Party, or is also prevented from discharging that function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.

5. Unless the Contracting Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedures.

6. The arbitral tribunal shall base its decision on this Agreement and on the generally recognized rules of international law. It shall take its decision by a majority of votes, and such decision shall be final and binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall defray the costs of its member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings. The costs of the president and the remaining costs shall in principle be shared equally by the Contracting Parties.

Article 12

Settlement of disputes between an investor and the Contracting Party receiving the investment

1. Any investment-related dispute, under the terms of this Agreement, between an investor of a Contracting Party and the other Contracting Party shall be notified in writing by the investor, together with a detailed report, to the Contracting Party receiving the investment and shall, as far as possible, be settled by amicable consultations.

2. If the dispute cannot be settled within six months from the date of the written notification referred to in paragraph (1), it may, at the request of the investor, be submitted to:

(a) The competent courts of the Contracting Party in whose territory the investment was made, or

(b) International arbitration according to the provisions of paragraph 5 of this article.

3. If the investor has given notice of the dispute and the parties fail to agree on the choice of (a) or (b), the opinion of the investor shall prevail.

4. In accordance with paragraphs (2) and (3) above, once the investor or the Contracting Party has submitted the dispute to the courts of the Contracting Party concerned or to international arbitration, the choice of that procedure shall be final.

5. In the event of recourse to international arbitration, the dispute may be submitted to:

(a) The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, opened for signature in Washington on 18 March 1965, when both States Parties to this Agreement have acceded to it. If this condition is not met, each Contracting Party consents that the dispute shall be submitted to arbitration in accordance with the regulations of the ICSID Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-finding Proceedings; or

(b) An ad hoc arbitral tribunal set up in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

6. If no agreement is reached on the choice of a forum, as provided for in paragraph 5 (a) or 5 (b), within three months of the written notification of the submission of the dispute to arbitration, the parties to the dispute shall submit the dispute to the International Centre for Settlement of Investment Disputes.

7. The arbitral tribunal shall issue its ruling in accordance with the provisions of this Agreement, the laws of the Contracting Party involved in the dispute, including its rules on conflict of laws, the terms of any specific agreement concluded in relation to the investment and the relevant principles of international law.

8. The arbitral awards shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party shall enforce them in accordance with its legislation.

9. The Contracting Parties shall not pursue, through diplomatic channels, arguments concerning an arbitration or judicial proceeding that is already under way, unless the parties to the dispute have failed to abide by the award of the arbitral award or the judgement of the ordinary courts, in accordance with the terms of compliance established in the award or judgement.

Article 13

Entry into force, duration and termination

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the date on which the Contracting Parties notify each other in writing that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. It shall remain valid for 10 years. Thereafter, it shall remain in force until the expiration of a period of one year from the date on which either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing of its decision to terminate this Agreement.

2. In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of articles 1 to 12 shall remain in force for a period of 10 years following that date.

Done in Buenos Aires, on 21 May 1997, in duplicate originals, in Spanish, both texts being equally authentic.

For the Government of the Argentine Republic:

GUIDO DI TELLA

For the Government of the Republic of Costa Rica:

JOSÉ MARÍA SALAZAR XIRINACHS

PROTOCOL

On signing the Agreement for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, the Argentine Republic and the Republic of Costa Rica have agreed on the following provisions, which shall be regarded as an integral part of the said Agreement.

Ad article 5

1. For the purposes of article 5 (1), the Contracting Parties agree that in the case of Costa Rica "market value" shall mean the fair price, which shall be equivalent to the amount of the compensation to be determined as follows:

The decision shall include all the information required to identify the asset being valued. In the case of movable property, the decision shall contain the valuation independently of the land, crops, constructions, tenancies, leases, commercial rights, the right to exploit deposits and any other assets or rights for which compensation may be paid. In the case of movable property, each item shall be valued separately and the elements that determine its valuation shall be indicated. The valuations shall take into account only actual permanent damage and shall not include or take into account future acts or valid expectations that affect the asset. Nor shall any increase in value as a result of the project that gave rise to the expropriation be recognized. Any expert decision must indicate clearly and in detail the grounds on which the value was assigned to the asset and the methodology that was used.

2. The Contracting Parties agree that any dispute that arises in connection with the distribution or administration of export quotas in the domestic market as a result of the imposition of quantitative restrictions by either of the Contracting Parties or by a third State shall be regarded as a commercial matter and shall therefore be settled by the Contracting Parties using the applicable commercial rules. Consequently, none of the provisions of article 5 of this Agreement shall serve as a basis for an investor of one of the Contracting Parties to claim that the effects of the distribution or administration of a quota should be considered to be an indirect expropriation.

Ad article 7

None of the provisions of article 7 (f) shall be interpreted as requiring either of the Contracting Parties to authorize the exercise of professional activities, which shall be subject to the legislation of each Contracting Party.

For the Government of the Argentine Republic:

GUIDO DI TELLA

For the Government of the Republic of Costa Rica:

JOSÉ MARÍA SALAZAR XIRINACHS

[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République du Costa Rica, (ci-après dénommées “ les Parties contractantes ”),

Désireux d'intensifier la coopération économique entre les deux États ;

Entendant créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs de l'une des deux Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante ;

Reconnaissant que la promotion et la protection de ces investissements par voie d'accord sont de nature à stimuler l'initiative économique individuelle et à accroître la prospérité des deux États ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme “ investissements ” désigne tout type de biens que l'investisseur d'une Partie contractante investit sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière, en particulier mais non exclusivement :

a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, cautions et gages ;

b) les actions, titres, obligations et toutes autres formes de participation à des sociétés ;

c) les obligations ou créances directement liées à un investissement et contractées et documentées selon les dispositions en vigueur dans le pays où est effectué l'investissement ;

d) les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d'auteur, les droits connexes, les droits de propriété industrielle tels que marques de fabrique ou de commerce, les appellations d'origine, les dessins et modèles industriels et les brevets ;

e) les concessions pour l'exercice d'une activité économique accordées par loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles.

En vertu du présent Accord, toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis est sans effet sur leur caractère d'investissement.

2. Le terme “ investisseur ” désigne, vis-à-vis de l'une ou l'autre des Parties contractantes, conformément à sa législation :

a) toute personne physique qui est un ressortissant de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci ;

b) toute personne morale constituée conformément à la législation et à la réglementation de la Partie contractante concernée, y compris les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés de personnes ou autres organisations ayant leur siège sur le territoire de ladite Partie contractante, que leur activité soit ou non à but lucratif ;

3. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux investissements effectués par les personnes physiques qui sont des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante si, à la date de l'investissement, lesdites personnes sont domiciliées depuis plus de deux ans sur le territoire de cette dernière Partie contractante, à moins qu'elles ne prouvent que l'investissement en question a été admis sur ce territoire en provenance de l'extérieur.

4. Les termes " gains " ou " revenus de l'investissement " désignent les sommes rapportées par un investissement, telles que participation aux bénéfices, dividendes, intérêts, augmentation de capital et autres rémunérations courantes.

5. Le terme " territoire " désigne le territoire national de chaque Partie contractante, y compris la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental au-delà de la limite de la mer territoriale de chacune des Parties, sur lesquelles les Parties contractantes exercent ou peuvent exercer, en vertu du droit international, des droits souverains ou leur juridiction aux fins de l'exploitation, de l'exploration et de la protection des ressources naturelles.

Article 2

Promotion et admission des investissements

1. Chacune des Parties contractantes s'efforce de promouvoir sur son territoire les investissements de l'autre Partie contractante et accueille ces investissements conformément à ses lois et règlements en vigueur.

2. Les Parties contractantes facilitent la tenue de consultations sur les possibilités d'investissement sur leur territoire respectif.

3. Quand une Partie contractante a admis un investissement sur son territoire, elle accorde les permis nécessaires pour cet investissement, ainsi que ceux requis pour l'exécution de contrats de licence et d'assistance technique, commerciale ou administrative.

Article 3

Protection

Chaque Partie contractante assure à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante ; elle leur accorde sur son territoire la pleine protection et la pleine sécurité et n'entrave pas leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur cession par des mesures arbitraires ou discriminatoires.

Article 4

Traitement national et clause de la nation la plus favorisée

1. Lorsqu'une Partie contractante admet sur son territoire des investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, elle leur accorde un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements effectués par ses propres investisseurs ou par ceux d'États tiers.

2. Entre le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée, chaque Partie contractante accorde le traitement qui est le plus favorable aux investissements de ces investisseurs.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux privilèges que chaque Partie contractante accorde aux investissements d'investisseurs d'un État tiers en raison de sa participation actuelle ou future à une zone de libre échange, à une union douanière, à un marché commun, à une union économique ou monétaire ou à d'autres institutions d'intégration économique similaires.

4. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne doivent pas être interprétées comme une obligation imposée à une Partie contractante d'étendre aux investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice d'un traitement, d'une préférence ou d'un privilège quelconque résultant d'un accord international tendant à éviter la double imposition ou d'autres accords en matière fiscale.

5. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne doivent pas non plus être interprétées comme l'obligation d'étendre aux investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice d'un traitement, d'une préférence ou d'un privilège quelconque résultant des accords bilatéraux de financement concessionnel conclus par la République argentine avec la République italienne le 10 décembre 1987 et avec le Royaume d'Espagne le 3 juin 1988.

Article 5

Expropriation et indemnisation

1. Ni l'une ni l'autre Partie contractante ne prend de mesures de nationalisation ou d'expropriation ni d'autres mesures pouvant avoir des effets analogues (ci-après dénommées "mesures d'expropriation") à l'encontre des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante, à moins que ces mesures ne soient prises pour des raisons d'utilité publique, sur une base non discriminatoire et conformément aux lois. Ces mesures s'accompagnent de dispositions visant à assurer une indemnisation prompte, adéquate et effective. Le montant de cette indemnisation correspond à la valeur marchande que l'investissement exproprié avait avant l'expropriation ou avant que l'expropriation imminente ne vienne à la connaissance du public, et comprend des intérêts courant à compter de la date de l'expropriation, calculés sur la base du taux commercial courant ; il est versé sans retard et doit être effectivement réalisable et librement transférable.

2. L'investisseur affecté a le droit, conformément aux lois de la Partie contractante qui réalise l'expropriation, à ce que son cas soit examiné promptement par une autorité ju-

diciaire ou autre, compétente et indépendante, de ladite Partie contractante, pour déterminer si l'expropriation ou l'évaluation de son investissement sont conformes aux principes établis au paragraphe 1 du présent article.

Article 6
Dédommagement pour pertes

Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre ou autre conflit armé, d'un état d'urgence nationale, d'une insurrection, de troubles civils ou de tout autre événement analogue bénéficient, en matière de restitution, d'indemnisation, de dédommagement ou autre réparation, d'un traitement non moins favorable que celui que cette autre Partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d'un État tiers.

Article 7
Transferts

1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante la possibilité de transférer librement les investissements et les gains, et en particulier mais non exclusivement :

- a) le capital initial et les fonds additionnels nécessaires au maintien ou au développement des investissements ;
- b) les bénéfices, profits, intérêts, dividendes ou autres revenus ordinaires ;
- c) les fonds destinés au remboursement des prêts visés à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article premier ;
- d) le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement ;
- e) les indemnités prévues aux articles 5 et 6 ;
- f) les revenus des ressortissants d'une Partie contractante ayant obtenu un permis de travail en relation avec un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante ;
- g) les paiements résultant du règlement de différends relatifs à un investissement.

Sans préjudice des dispositions du présent article, les Parties contractantes peuvent prendre des mesures conformes à leur législation, afin d'éviter des actions frauduleuses, de veiller au respect d'obligations fiscales ou de recueillir des informations à des fins statistiques.

2. Les transferts s'effectuent sans délai, en monnaie librement convertible au cours en vigueur à la date du transfert, selon les procédures établies par la Partie contractante sur le territoire de laquelle a été effectué l'investissement, lesquelles ne peuvent porter atteinte aux droits énoncés dans le présent article.

3. On considère qu'un transfert est effectué sans délai lorsqu'il est réalisé dans le délai normalement nécessaire pour l'accomplissement des formalités de transfert. Ce délai, qui ne peut en aucun cas excéder une durée de deux mois, commence à courir au moment de la remise de la demande correspondante, présentée dans les formes requises.

Article 8
Subrogation

1. Au cas où une Partie contractante ou l'un de ses organismes verse des fonds à un investisseur en vertu d'une garantie ou d'une assurance contre des risques non commerciaux liés à un investissement, l'autre Partie contractante considère que la Partie contractante ou l'organisme en question est valablement subrogé aux droits ou prétentions de l'investisseur couvert par la garantie. La Partie contractante ou son organisme est autorisé, dans les limites de la subrogation, à exercer les droits que l'investisseur aurait été habilité à faire valoir.

2. En cas de subrogation conformément au paragraphe 1 du présent article, l'investisseur ne peut présenter aucune réclamation à moins d'y avoir été autorisé par la Partie contractante susmentionnée ou son organisme.

Article 9
Application d'autres normes plus favorables

Si les dispositions légales de l'une des Parties contractantes ou les obligations découlant du droit international existantes ou les engagements convenus ultérieurement entre les Parties contractantes en sus des clauses du présent Accord ou si les dispositions d'un accord entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante contiennent des normes de caractère général ou particulier qui accordent aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, lesdites normes prévalent sur celles du présent Accord dans la mesure où elles sont plus favorables.

Article 10
Champ d'application de l'Accord

Le présent Accord s'applique à tous les investissements effectués antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, mais ses dispositions ne s'appliquent à aucun désaccord, litige ou différend ayant surgi avant son entrée en vigueur ou lié à des faits survenus avant son entrée en vigueur ou se rapportant à la simple présence de situations préexistantes.

Article 11
Règlement des différends entre les Parties contractantes

1. Les différends qui pourraient surgir entre les Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application du présent Accord devront, dans la mesure du possible, être réglés par la voie diplomatique.

2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut être réglé de cette manière dans un délai raisonnable, il est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l'une des Parties contractantes.

3. Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante. Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'arbitrage, chaque Partie con-

tractante nomme un membre du tribunal. Les deux membres ainsi nommés élisent un ressortissant d'un État tiers qui, avec l'approbation des deux Parties contractantes, est nommé Président du tribunal. Le Président est nommé dans un délai de cinq mois à compter de la date de notification de la demande d'arbitrage.

4. Si les nominations nécessaires n'ont pas été effectuées dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, faute d'un autre arrangement, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le Président serait un national de l'une des Parties contractantes ou s'il était empêché pour toute autre raison de s'acquitter de cette fonction, il reviendrait au Vice-Président de la Cour de procéder aux nominations. Si ce dernier lui-même était un national de l'une des Parties contractantes ou s'il était également empêché, il reviendrait au membre de la Cour venant immédiatement à la suite dans l'ordre hiérarchique et qui ne serait pas un national de l'une des Parties contractantes de procéder aux nominations.

5. À moins que les Parties contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa propre procédure

6. Le tribunal arbitral se prononce sur la base du présent Accord, ainsi que sur la base des normes de droit international généralement reconnues. Il prend sa décision à la majorité des voix. Cette décision est définitive et obligatoire pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais découlant des activités de son arbitre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale ; en principe, les frais du président et les autres frais sont pris en charge à parts égales par les Parties contractantes.

Article 12

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante réceptrice de l'investissement

1. Tout différend relatif à des investissements, aux sens du présent Accord, entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante est notifié par écrit, avec des informations détaillées, par l'investisseur à la Partie contractante réceptrice de l'investissement et se règle, dans la mesure du possible, par des consultations amiables.

2. Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois à compter de la date de la notification écrite visée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis, à la demande de l'investisseur :

a) soit aux tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle a été effectué l'investissement ;

b) soit à l'arbitrage international aux conditions décrites au paragraphe 5.

3. Lorsque le différend a été notifié par l'investisseur, si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix entre les options a) et b) ci-dessus, c'est l'opinion de l'investisseur qui prévaut.

4. Conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, une fois que l'investisseur ou la Partie contractante a soumis le différend aux juridictions de la Partie contractante impliquée ou à l'arbitrage international, le choix de l'une ou l'autre de ces procédures est définitif.

5. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend peut être porté devant l'une des instances d'arbitrage indiquées ci-dessous :

a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la « Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, quand chaque État partie au présent Accord a adhéré à ladite Convention. Tant que cette condition n'est pas remplie, chaque Partie contractante donne son consentement à ce que le différend soit soumis à arbitrage, conformément au Règlement du Mécanisme complémentaire du CIRDI ;

b) un tribunal arbitral spécial créé selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

6. Si le différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois selon les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 5, il est soumis au CIRDI .

7. L'organe d'arbitrage statue sur la base des dispositions du présent Accord, du droit de la Partie contractante qui est partie au différend y compris des règles relatives aux conflits de lois

et des termes d'éventuels accords particuliers conclus au sujet de l'investissement, ainsi que des principes du droit international applicable en la matière.

8. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante les exécute conformément à sa législation.

9. Les Parties contractantes s'abstiennent de traiter par la voie diplomatique les différends concernant l'arbitrage ou une procédure judiciaire engagée jusqu'à ce que les procédures correspondantes aient été menées à leur terme, à moins que les parties au différend n'aient pas accepté la sentence du tribunal arbitral ou le jugement du tribunal ordinaire, selon les termes stipulés dans ladite sentence ou ledit jugement.

Article 13

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes se notifient par écrit qu'elles ont rempli les conditions constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur. Sa durée de validité est de dix ans. Il peut ensuite être prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie contractante sa décision de le dénoncer.

2. Pour ce qui est des investissements effectués avant la date de notification de la dénonciation du présent Accord, les dispositions des articles premier à 12 leur restent applicables pendant les dix années qui suivent cette date.

Fait à Buenos Aires le 21 mai 1997, en deux exemplaires originaux en langue espagnole faisant également foi.

Pour Le Gouvernement de la République argentine :

GUIDO DI TELLA

Pour Le Gouvernement de La République du Costa Rica :

JOSÉ MARÍA SALAZAR XIRINACHS

PROTOCOLE

Au moment de signer l'Accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements, la République argentine et la République du Costa Rica sont convenues des dispositions suivantes, qui font partie de l'Accord.

Ad Article 5

1. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 5, les Parties contractantes conviennent que dans le cas du Costa Rica, on entend par « valeur marchande » le juste prix qui équivaut au montant de l'indemnisation qui sera déterminé de la façon suivante :

L'avis devra inclure toutes les données nécessaires à l'identification du bien évalué.

Quand il s'agit d'immeubles, l'avis comprendra l'évaluation indépendante du terrain, des cultures, des constructions, des loyers, de l'affermage, des droits commerciaux, du droit d'exploitation de gisements et de tous autres biens ou droits susceptibles d'indemnisation.

Quand il s'agit de biens meubles, chacun sera évalué séparément, et il sera donné indication des facteurs déterminants de son évaluation.

Les évaluations ne tiendront compte que des dommages réels permanents. Les faits à venir, pas plus que les perspectives pouvant affecter le bien ne seront inclus ou pris en compte. Il ne pourra non plus être tenu compte des plus-values découlant du projet qui est à l'origine de l'expropriation.

Tout avis d'expert devra indiquer, de façon ample et détaillée, les éléments de jugement sur lesquels se fonde la valeur attribuée au bien et la méthodologie employée.

2. Les Parties contractantes conviennent que tout différend éventuel en matière de distribution ou d'administration de quotas d'exportation sur le marché intérieur, découlant de l'application de restrictions quantitatives de la part de l'une des Parties contractantes ou d'un État tiers est une question de caractère commercial. En conséquence, ce différend sera réglé selon les règles commerciales applicables entre les Parties contractantes.

De ce fait, aucune des dispositions de l'article 5 du présent Accord ne servira de base à ce qu'un investisseur de l'une des Parties contractantes allègue que les effets découlant de la distribution ou de l'administration d'un quota constituent une expropriation indirecte.

Ad Article 7

Aucune des dispositions de l'alinéa f) de l'article 7 ne pourra s'interpréter comme obligeant l'une ou l'autre des Parties contractantes à autoriser l'exercice d'une profession, lequel sera assujéti à la législation de chaque Partie contractante.

Pour le Gouvernement de la République argentine :

GUIDO DI TELLA

Pour Gouvernement de la République du Costa Rica :

JOSÉ MARÍA SALAZAR XIRINACHS